



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

10646/2021

ELECTROINGENIERIA S.A. Y OTROS c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - A.F.I.P. s/ACCION
MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO

Córdoba, 13 de mayo de 2025.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **“Electroingeniería S.A y Otros C/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva-Acción meramente declarativa de derecho, Ordinario-”** (Expte. n° 10646/2021) y su acumulado **“Eling Energía SA y otro C/ AFIP – DGI s/ Acción Meramente Declarativa de Derecho”** (Expte. 41044/2022), puestos a despacho a los fines de resolver, de los que resulta:

I.- Que oportunamente, se presentan los letrados Germán L. Gianotti y Facundo Cortes Olmedo, en carácter de apoderados de ELECTROINGENIERÍA S.A -EISA-, INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR S.A. -INTESAR- y GRUPO ELING S.A. –GESA-, con el patrocinio letrado de Jorge B. Aguirre Mosquera y Matías González Palau, y manifiestan que dichas sociedades conforman, a los efectos de las presentes actuaciones, un litisconsorcio facultativo en los términos del artículo 88 del CPCCN.

Efectuada esta aclaración afirman que interponen acción declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del ritual, en contra de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (hoy ARCA), a efectos que se ponga fin a la situación de incertidumbre que crea el art. 32 de la ley 11.683 al otorgar “facultades” al órgano recaudador para conceder las facilidades allí



previstas, solicitando en definitiva que se declare que la AFIP está legalmente obligada a conceder un plan de facilidades para el pago de las sumas adeudadas, siempre que se hallen acreditados los extremos exigidos por la norma para el otorgamiento de dicho beneficio.

Relatan los antecedentes de hecho de cada una de las empresas actoras, y que, con motivo de encontrarse ante condiciones económico-financieras de suma gravedad, que les impedían el cumplimiento íntegro y oportuno de sus obligaciones con el fisco nacional, con fecha **12 de agosto de 2021** sus representadas se presentaron ante la AFIP, a los fines de solicitar el otorgamiento a cada una de ellas de un plan de facilidades de pago en los términos del art. 32 de la ley 11.683 (t.o. Dec. 821/1998).

Aclaran que dichas solicitudes abarcan deudas generadas con posterioridad al 31/07/2020 (ya que las anteriores a esa fecha, refieren, fueron íntegramente regularizadas en el marco de los planes dispuestos por la ley 27.562).

Argumentan que se trata de deuda contraída en plena pandemia, habiendo podido realizar sólo un cumplimiento parcial de sus obligaciones, procurando de esa forma preservar las fuentes de trabajo y la continuidad de las actividades de obra.

Afirman que tales peticiones a la AFIP se fundamentaron en las extremas dificultades por las que atraviesa el sector de la construcción, incluida la obra pública (tanto por la propia crisis económica que atraviesa el país, como por la incidencia de la pandemia mundial), agravándose por la falta de entrada en ritmo del flujo de actividades de las cuales participan las empresas.

Aseguran que solicitaron la concesión de Planes de Facilidades de pago de 120 cuotas, con una tasa diferencial para PyME tope del 1,5% mensual y, sin embargo, no existió respuesta por parte del órgano recaudador.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

Adjuntan certificaciones contables que reflejan, desde su punto de vista, la situación financiera de cada una de las empresas actoras. Aducen que la administración posee la facultad de optar entre diversas conductas posibles y, dentro de este amplio margen, cualquier decisión prudencial que se adopte será válida en tanto no implique desviación o abuso de poder o incurrir en arbitrariedad. Añaden, que la actuación de AFIP ha sido ilegal y arbitraria y que ha colocado a las sociedades actoras en un riesgo de dejar de existir.

En torno a las facultades discrecionales de la administración, expresan que cuando el art. 32 de la ley 11.683 otorga a la Administración Federal el poder discrecional de conceder facilidades de pago a los contribuyentes que acrediten hallarse en una situación económico-financiera que les impide cumplir temporáneamente con sus obligaciones, no le está concediendo una facultad omnímoda, subjetiva, sino que ese poder debe ser ejercida de modo que la finalidad de la ley se cumpla.

En este sentido, sostienen que, tanto omitir conceder el plan de pagos como no contestar las reiteradas solicitudes de otorgamiento del mismo a contribuyentes, implica arbitrariedad que es precisamente el ejercicio de la discrecionalidad al margen de la ley.

Individualizan como derechos constitucionales afectados el de propiedad, de defensa, debido proceso adjetivo, de la garantía de razonabilidad, e igualdad. Enuncian los recaudos de procedencia de la acción entablada, ofrecen pruebas y efectúan la reserva del caso federal.

II.- Que el Tribunal imprime trámite ordinario a la demanda, y ordena la comunicación de la causa a la Procuración del Tesoro de la Nación y la vista al Sr. Fiscal Federal a los fines de su dictamen. Cumplido ello, se ordena el traslado de la demanda, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 inc. 1 de la ley 26.854, y se requiere el informe previo previsto en la mentada norma.



Incorporado el informe previo, el Suscripto dicta una medida cautelar en favor de la actora, la que fue apelada por la contraria y confirmada por el Superior mediante resolución, de fecha 11.10.2022.

III.- Que en representación de la demandada comparece el letrado **José G. del Prado**, quien solicita el rechazo de la demanda, con imposición de costas.

Descarta la existencia de incertidumbre en la causa, y refiere que existe una disconformidad por parte de la actora, por el no otorgamiento por parte de este Organismo del beneficio del art 32 de la Ley 11.683 el que faculta a su representada a conceder facilidades para el pago de tributos, intereses y multas.

Efectúa negativas generales y específicas, considera inaplicables al caso el derecho, la jurisprudencia y doctrina invocada y juzga improcedente la vía utilizada.

En torno a esto último afirma que no existe incertidumbre, en tanto, los planes de facilidades de pago son una excepción que prevé la administración para casos específicos, puesto que la regla general es el pago al momento del vencimiento de la obligación.

Recuerda las facultades regladas y discrecionales, y considera que la pretensión del actor constituye un desconocimiento de las potestades discrecionales del Organismo Fiscal.

Interpreta que, en las presentaciones digitales de fecha 12/08/2021, que dieron origen al trámite administrativo iniciado por cada una de las accionantes no se hizo referencia al artículo 32, sino que de manera genérica se solicitó “un plan de pagos” alegándose que la empresa se encontraba en una situación financiera complicada, la cual resultó agravada por la pandemia mundial de Covid-19.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

Añade, que se trató de un trámite genérico, y que su mandante concluyó el trámite administrativo, tras haberle dado respuesta. Señala las potestades que posee el organismo para conceder o no los planes de facilidades de pago para el pago de tributos, intereses y multas, previsto en el art. 32 de la ley 11.683, ofrece pruebas y efectúa la reserva del caso federal.

IV.- Que mediante la providencia respectiva se rechaza el pedido de ampliación de demanda, y se tiene por contestada la demanda por la accionada en tiempo y forma.

V.- Que el 21.02.2024 -y conforme a la acumulación dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba con fecha 31/10/2023 en los autos: “ELING ENERGIA S.A Y OTRO C/AFIP-DGI-Acción meramente declarativa de derecho- (Expte. Nro. 41044/2022)” a los presentes autos- se procedió a efectivizar dicha acumulación en el sistema de gestión informático lex 100.

VI.- Que, sustanciada la causa, se dicta el decreto de autos quedando la misma en estado de ser resuelta.

CONSIDERANDO:

I.- Que mediante estas acciones declarativas de certeza las sociedades comparecientes requieren, se ponga fin a la situación de incertidumbre creada por el art. 32 de la ley 11.683—*sin reglamentar*—, y en consecuencia que el Suscripto declare que la demandada se encuentra obligada a conceder un plan de facilidades de pago de las sumas adeudadas, siempre que se hallen acreditados los extremos exigidos por la norma legal citada para el otorgamiento del beneficio.

II.- Que, encarando la procedencia formal de la acción, el estado de incertidumbre se verifica desde que la facultad de conceder facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias contemplada en la norma es susceptible de generar la duda en los reclamantes de si la administración se



encuentra obligada a tal concesión cuando se verifican los requisitos para su procedencia.

Esta situación también es susceptible de producir un daño o lesión actual y no existe otro remedio legal para aclarar tal incertidumbre de manera inmediata.

Con lo cual cabe concluir que se encuentran cumplidos en la especie los recaudos formales previstos en el art. 322 del CPCCN.

III.- Que, sentado ello, corresponde ingresar al fondo del asunto teniendo en cuenta cada uno de los componentes fácticos y jurídicos surgidos a raíz de los planteos administrativos formalizados y los de esta causa en trámite.

A este respecto, cabe reiterar que la actora ha solicitado que el Suscripto disipe la situación de incertidumbre que crea el art. 32 de la ley 11.683, en cuanto entiende que si la actora cumple los recaudos normativos allí previstos la demandada se encuentra obligada a conceder los planes de facilidades de pago peticionados, y así requiere que el Suscripto lo declare.

La nombrada norma prevé, en su parte pertinente: *“Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económicas-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.....”*.

Sobre el particular la doctrina ha expresado: *“Esta previsión legal autoriza al organismo recaudador a conceder facultades para el pago de tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares, a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económica-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. Por lo tanto, entendemos que deben ser los*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

sujetos que consideren encontrarse en determinadas situaciones críticas de su economía quienes deban solicitar y acreditar la verificación de esas circunstancias” (Procedimiento Tributario, Ley 11.683 comentada, Fernando J. Diez-Germán J. Ruetti. 1ra. Ed. La Ley 2016)

A partir de ello, surge evidente que se trata de una facultad que tiene el organismo de recaudación para decidir, bajo el cumplimiento de ciertos extremos si procede la concesión de los planes de facilidades de pago.

Es precisamente allí donde anida el conflicto, ya que -como se expuso- la actora interpreta que esta facultad se transforma en obligación cuando el peticionante satisface los extremos normativos exigidos, entendiendo que la ausencia de respuesta de la demandada a sus peticiones concretas resultan arbitrarias.

Descripto este panorama, el principio general es que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma y los planes de facilidades de pago configuran beneficios excepcionales en favor de los que reúnan las condiciones necesarias para el acceso.

Por otra parte, estos beneficios a pesar de ser generales, sólo pueden gozarlo aquellos contribuyentes y responsables que reúnan las condiciones fijadas para ello, quienes se encontraran en un lugar de privilegio del que no gozan otros contribuyentes y responsables.

En este sentido la demandada cuenta con amplias facultades para establecer planes de facilidades de pago y determinar qué sujetos y obligaciones tributarias se encuentran incluidos en los regímenes excepcionales.

Ahora bien, la situación traída a mi conocimiento posee matices especiales, en la medida que lo solicitado oportunamente por las



sociedades actoras, no tuvo que ver con un pedido de acogimiento a los planes de facilidades de pago vigentes, sino específicamente a los que habilita el art. 32 de la ley 11683.

En lo que aquí interesa, si bien es cierto que no se colocó el número de la norma al formularse primigeniamente la petición, tal circunstancia carece de relevancia para construir una interpretación forzada que exima a la administración encauzar correctamente la petición.

En efecto, cada uno de los pedidos fueron materializados citando textualmente la parte pertinente de la norma legal.

Es más, se puso a disposición de la administración toda información necesaria para comprobar cada uno de los extremos requeridos por ésta para el otorgamiento del plan.

A mayor abundamiento, se precisó puntillosamente la modalidad del plan de pagos pretendido, y se expresó de manera categórica y reiterada que los planes de facilidades de pago actuales, no resultaban compatibles con la necesidad y situación del contribuyente.

Sin perjuicio de ello, la demandada al responder estos pedidos *–luego de interpuesta la demanda–* les explicó a las empresas aquí actoras la vigencia de la resolución general Nro. 5101/2021, el régimen de facilidades de pagos permanente normado por la RG 4268/2018, y expresó que -en cuanto a la solicitud de aplicación del art. 1 de la RG 4936- debía estarse a lo allí dispuesto, para luego disponer el archivo del trámite, **pero ninguna referencia esbozó sobre la solicitud puntual que habilita la norma.**

Este cuadro de situación amerita confrontar los actos de la administración con el test de legalidad que debe exigirse a un organismo del estado, que tiene en sus manos nada menos que la percepción de la renta pública como una de sus funciones más trascendentes y que cuenta, en su matriz, con un repertorio de herramientas que le permiten dar continuidad a





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

la recaudación en un contexto permanente de legalidad que exige tomar decisiones fundadas.

Se ha escrito sobre el tema: *“En el terreno práctico, la irracionalidad o arbitrariedad constituye una cuestión de grado directamente vinculada al caso concreto pero lo cierto es que en este juzgamiento, donde habrá que revisar casi siempre cuestiones de hecho, radica la verdadera función de fiscalización que realizan los jueces sobre la actividad administrativa”*. (Ver El acto administrativo, teoría y régimen jurídico. Juan C. Cassagne. 1era. Edición, Buenos Aires: La Ley, 2012, pág128. Sin subrayar el texto transcripto).

Efectuando el cotejo de rigor, la respuesta de la Afip no satisface dichos postulados, ya que carece de motivación en relación al tópico en que fue requerida, por lo que resulta arbitraria a la luz de los derechos constitucionales afectados que exigen que la actividad administrativa sea desarrollada en un marco de razonabilidad y seguridad jurídica.

Esto, permite afirmar que no existe una reserva de discrecionalidad en favor de la administración y en desmedro de los administrados, que autorice el desarrollo de cualquier actividad –*con tintes arbitrarios*- exentas del control judicial, ya que tal extremo llevaría colocar a ésta en una injustificada posición de privilegio desterrando los intereses de los particulares ante situaciones injustas o que se concretan fuera del marco legal.

Ahora bien, constatada la arbitrariedad, se debe ingresar a un segundo análisis, que me remite a considerar si la Afip **se encuentra obligada** a conceder los planes de facilidades de pago y si, paralelamente, la contraria acredita los extremos normativos exigidos a tal fin.

Este asunto abre dos interrogantes, el primero de ellos es si la norma habilita una especie de **“automaticidad en la concesión”** o requiere un *juicio analítico, previo y motivado* de la administración para evaluar el



cumplimiento de los recaudos legales. El restante, es si el Suscripto puede, ante la ausencia de aquel juicio, suplir aquella facultad.

Sin dudas, por el reparto de competencias, la demandada cuenta con un andamiaje jurídico que la nutren de prerrogativas y facultades específicas para decidir, incluso, en casos particulares, planes de facilidades de pago de tributos, intereses y multas. Si bien, la decisión tiene un componente discrecional, la evaluación nunca puede prescindir del encuadre normativo, y menos aún de la exigencia de motivación.

Por lo que no se trata de una concesión automática sino atravesada por un juicio de la administración **que en el caso de autos no se hizo**, de allí, que el punto central a decidir es si en esta demanda se debe emitir una decisión que califique el cumplimiento o no de los recaudos legales por parte de la actora.

Ahora bien, este punto se encuentra condicionado por la naturaleza jurídica de esta acción que tiende a disipar un estado de incertidumbre respecto a la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica y su carácter preventivo de un futuro daño en un marco cognitivo acotado por la imposibilidad de dictar sentencias de carácter condenatorio.

Estas limitaciones tornan inconveniente inclinarse a determinar la obligatoriedad de la concesión de las facilidades en cuestión máxime cuando, paralelamente, se cuenta con información indiciaria de parte, sin ratificación de un perito oficial.

De manera que la emisión de un juicio técnico excede ampliamente la órbita de mi competencia e impone abstenerse de intervenir en las funciones específicas reservadas a otro poder.

En sintonía con lo recién razonado nuestro máximo Tribunal de justicia sostuvo. *“Que si bien esta Corte ha reconocido que el control judicial de los actos denominados tradicionalmente discrecionales o de pura*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

administración encuentra su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos regados de la decisión –competencia, forma, causa, finalidad y motivación- y, por el otro, el examen de su razonabilidad (Fallos: 315:1361, entre varios), ello no implica que el juez reemplace a la Administración, ya que dicha competencia jurisdiccional es revisora, mas no sustitutiva (Fallos: 331:1369). (CSJN, autos: “Roa Restrepo, Henry c/ EN –M. Interior OP y V –DNM s/recurso directo DNM, Expte CAF53869/2017/CS1-CA1, de fecha 06.05.2021, considerando nro.8. No subrayada la fracción del texto transcripto).

Más allá de ello, la arbitrariedad acreditada en la causa, que justifica la incertidumbre de la actora, exige dar una respuesta que sin salirse del campo cognitivo de la demanda se amolde al ordenamiento jurídico.

IV.- En este lineamiento, corresponde hacer lugar a la acción entablada por ELECTROINGENIERÍA S.A -EISA-, INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR S.A. -INTESAR- y GRUPO ELING S.A. –GESA- y por ELING ENERGÍA S.A. -EESA- (anteriormente, Electroingeniería S.A.) e INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. –INTESAR (en la acción que resultara acumulada a la presente), por lo que se ordena a la demandada que en el término de diez (10) días resuelva las solicitudes de los planes de facilidades de pago que conforman ambos juicios acumulados, debiendo justificar de manera precisa y detallada la decisión.

Mientras tanto, hasta que esta sentencia quede firme, en atención a los derechos comprometidos y teniendo en cuenta que aún se mantiene la incertidumbre, corresponde ordenar a la demandada que deberá abstenerse de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial en concepto de pago de los impuestos y accesorios en mora; trabar por sí y/o demandar judicialmente medidas cautelares de cualquier tipo en resguardo de dichos créditos; determinación de gravámenes y accesorios y/o aplicar a las actoras



sanciones por infracciones administrativas, que pudieran corresponder y **que se vinculen con los pedidos de acogimiento a los planes de facilidades de pago** peticionados por las actoras, en los términos del art. 32 de la ley 11.683, para cancelar las deudas generadas con posterioridad al 31.07.2020 y hasta el 07.12.2021 (para la pretensión deducida en "Electroingeniería SA y Otros c/ Afip", expte. 10646/2021) y desde diciembre de 2021 a septiembre de 2022 (para la pretensión deducida en la causa "Eling Energía SA y otros c/ Afip, expte. 41044/2022) hasta que la sentencia quede firme.

V.- Que, si bien las pretensiones han prosperado, la especial modalidad de hacerse efectivas en virtud del acotado margen cognitivo de la causa, relacionado con la imposibilidad de dictar una sentencia condenatoria, conforme fuera señalado en párrafos anteriores, me llevan a decidir que corresponde imponer las costas en el orden causado.

Por otra parte, los honorarios de los profesionales actuantes deben regularse en base a lo preceptuado por las disposiciones pertinentes de la ley 27.423, atendiendo a que la tarea profesional se inició durante la vigencia de dicha ley.

A tal fin, corresponde establecer que, al tratarse de una acción declarativa no susceptible de apreciación pecuniaria, dicha estimación deberá practicarse teniendo en cuenta las disposiciones del art. 48 (por aplicación extensiva y por no tener un régimen específico), en función de las pautas de valoración generales para regular honorarios del art 16 y del art. 29 (etapas procesales).

En la presente causa, los trabajos profesionales realizados comprenden solo una (1) de las etapas procesales fijadas en el art. 29 antes citado. En numerosos precedentes que se tramitaron en el juzgado a mi cargo y en concordancia con diferente doctrina que fue citada en dichos





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

pronunciamientos respecto a la aplicación de los mínimos en procesos que tienen más de una etapa procesal, he señalado que el honorario mínimo legal establecido en la ley para las acciones de amparos -20 UMA- ha sido fijado para el desempeño profesional en todas las etapas del proceso.

Como consecuencia de ello, entendí que en aquellas causas en los que solo se ha desarrollado una de las dos etapas procesales establecidas para el proceso de amparo, correspondía regular como mínimo la mitad de dicho honorario –esto es, 10 UMA-. Sin embargo, las dos Salas de la Cámara Federal de Córdoba han modificado reiteradamente este criterio, fijando como mínimo un honorario de 20 UMA, independientemente de las etapas o tarea desarrollada efectivamente en la causa.

Conforme a ello, estimo necesario dejar a salvo mi criterio antes expuesto y por razones de economía procesal aplicar el criterio de la Cámara Federal de Córdoba y en consecuencia fijar los honorarios de la asistencia jurídica de la parte actora, Abogados Germán Luis Gianotti, Facundo Carlos Cortés, Jorge Bernardo Aguirre Mosquera y Matías González Palau en la cantidad de 20 UMA en conjunto, en el doble carácter actuado, en la proporción de ley y por todo concepto, lo que equivale a la suma de \$ 1.379.700 a la fecha de la presente resolución. No corresponde regular honorarios a los apoderados de la demandada, (Abogados José Gabriel del Prado, María José Villegas y Teresa María Gardel) por ser profesionales a sueldo de su mandante.

Asimismo, corresponde establecer que el pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago (Conf. art. 51 de la ley 27.423).



#36072404#447532182#20250513132633182

Dichos honorarios deberán ser abonados por la obligada al pago en el término de diez (10) días hábiles bajo apercibimiento de aplicar en caso de incumplimiento el interés de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA hasta su efectivo pago sobre el importe en pesos aquí expresado.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

1.- Hacer lugar a la acción entablada por ELECTROINGENIERÍA S.A -EISA-, INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR S.A. -INTESAR- y GRUPO ELING S.A. -GESA- y por ELING ENERGÍA S.A. -EESA- (anteriormente, Electroingeniería S.A.) e INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. -INTESAR (en la acción que resultara acumulada a la presente), por lo que se ordena a la demandada que en el término de diez (10) días resuelva las solicitudes de los planes de facilidades de pago que conforman ambos juicios acumulados, debiendo justificar de manera precisa y detallada la decisión.

Mientras tanto, hasta que esta sentencia quede firme, en atención a los derechos comprometidos y teniendo en cuenta que aún se mantiene la incertidumbre, corresponde ordenar a la demandada que deberá abstenerse de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial en concepto de pago de los impuestos y accesorios en mora; trabar por sí y/o demandar judicialmente medidas cautelares de cualquier tipo en resguardo de dichos créditos; determinación de gravámenes y accesorios y/o aplicar a las actoras sanciones por infracciones administrativas, que pudieran corresponder y **que se vinculen con los pedidos de acogimiento a los planes de facilidades de pago peticionados por las actoras, en los términos del art. 32 de la ley 11.683, para cancelar las deudas generadas con posterioridad al 31.07.2020 y hasta el 07.12.2021 (para la pretensión deducida en "Electroingeniería SA y Otros c/ Afip", expte. 10646/2021) y desde diciembre de 2021 a septiembre de 2022 (para la pretensión deducida en**





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

la causa "Eling Energía SA y otros c/ Afip - expte. 41044/2022), hasta que la sentencia quede firme.

2.- Imponer las costas en el orden causado, conforme a lo expresado en el considerando respectivo que se tiene por reproducido.

Fijar los honorarios de la asistencia jurídica de la parte actora, Abogados Germán Luis Gianotti, Facundo Carlos Cortés, Jorge Bernardo Aguirre Mosquera y Matías González Palau en la cantidad de 20 UMA en conjunto, en el doble carácter actuado, en la proporción de ley y por todo concepto, lo que equivale a la suma de \$ 1.379.700 a la fecha de la presente resolución. No corresponde regular honorarios a los apoderados de la demandada, (Abogados José Gabriel del Prado, María José Villegas y Teresa María Gardel) por ser profesionales a sueldo de su mandante.

Asimismo, corresponde establecer que el pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago (Conf. art. 51 de la ley 27.423).

Dichos honorarios deberán ser abonados por la obligada al pago en el término de diez (10) días hábiles bajo apercibimiento de aplicar en caso de incumplimiento el interés de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA hasta su efectivo pago sobre el importe en pesos aquí expresado.

3.- Protocolícese y hágase saber.-

